

Septiembre 27 de 1939

## 39ª REUNION — SESION ESPECIAL

Presidencia del doctor **RAMON S. CASTILLO**,  
Vicepresidente de la Nación

**Senadores presentes:** Alberto Arancibia Rodríguez, Ricardo Caballero, Raúl Ceballos Reyes, Juan Cepeda, Atanasio Eguiguren, Francisco R. Galíndez, Manuel García Fernández, Héctor González Iramain, Laureano Landaburu, Eduardo Laurencena, Lucio López Peña, Alfredo L. Palacios, Robustiano Patrón Costas, Jorge J. Pinto, Guillermo Rothe, Antonio Santamarina, Carlos Serrey, Gilberto Suárez Lago, Benjamín Villafañe.

**Senadores ausentes, con licencia:** Juan José Lubary, Juan R. Vidal.

**Senadores ausentes, con aviso:** Mario Arenas, Juan B. Castro, Alberto Francisco Figueroa.

**Senadores ausentes:** Herminio Arrieta, Aldo Cantoni, José Heriberto Martínez, Matías G. Sánchez Sorondo.

### SUMARIO

#### 1.—Asuntos entrados:

I.—Comunicación oficial.

II.—Despacho de comisión.

III.—Petición.

2.—Proyecto de ley del senador Caballero, fijando el alcance de la ley número 11.729, respecto de los obreros de la industria.

3.—A indicación del senador Eguiguren, se resuelve tratar hoy o en la sesión de mañana, después del presupuesto, el despacho sobre régimen autónomo del transporte automotor.

4.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación General, en el proyecto de ley, en revisión, creando la caja de jubilaciones, pen-

siones y retiros de la marina mercante nacional. Se aprueba con modificaciones.

5.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación General, en el proyecto de ley, en revisión, sobre estabilidad y escalafón de los empleados bancarios.

6.—A indicación del senador Suárez Lago, se da entrada a un pedido de acuerdo del Poder Ejecutivo, para nombrar a un miembro del directorio del Banco de la Nación.

7.—Asunto entrado:

IV.—Mensaje del Poder Ejecutivo, relativo al asunto número 6.

8.—Continúa la consideración del asunto número 5, levantándose la sesión, por falta de quórum.

9.—Apéndice: Inserción solicitada por el senador Rothe.

—En Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre de 1939, siendo la hora 16 y 10 minutos, dice el

**Sr. Presidente.** — Queda abierta la sesión. Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

## 1

## ASUNTOS ENTRADOS

## I

## Comunicación oficial

La Comisión Organizadora del I Congreso Panamericano de la Vivienda Popular, invita a los miembros del Senado a concurrir a la sesión inaugural. (*Al archivo.*)

**Sr. Presidente.** — Quedan invitados los señores senadores.

## II

## Despacho de comisión

## PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En el proyecto de ley, en revisión, por el que se crea la División Archivo, Publicaciones y Museo en la Cámara de Diputados.

—Al orden del día.

## III

## Petición

La Asociación Amigos del Campo formula observaciones al proyecto de ley en revisión por el que se crea el Consejo Agrario Nacional. (*A sus antecedentes.*)

## 2

## MODIFICACION DE LA LEY NUMERO 11.729. — PROYECTO DE LEY DEL SENADOR CABALLERO.

## PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Agréguese en el artículo 154 del Código de Comercio: «Los obreros de la industria no están incluidos en el régimen legal establecido en este artículo y los siguientes, hasta el artículo 160 inclusive.»

Art. 2º — Este agregado será incluido en la primera edición oficial del Código de Comercio que se ordene imprimir.

Art. 3º — El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley, estableciendo con la especialización que crea necesaria, las categorías de obreros del comercio que realizan ta-

reas inherentes al comercio, a que se refiere el texto del artículo 154 del Código de Comercio, de acuerdo con la modificación de la ley número 11.729.

Art. 4º — Comuníquese, etc.

*Ricardo Caballero.*

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Al referirme en esta Cámara, en una digresión incidental, en el curso del debate sobre la ley reguladora de la industria azucarera, a las perturbaciones que sospechaba debía suscitar en las relaciones entre patrones y asalariados, la ley número 11.729, por ser una ley de clase, es decir una ley destinada a contraponer los intereses del capital y del trabajo, a mantener la lucha, en vez de procurar la armonía, entre esas dos potencias, sobre las que debe apoyar su desenvolvimiento material la sociedad, lejos estaba de saber, que los efectos que presentía, se hubieran producido en forma tan alarmante en esta Capital.

La interpretación dada por la justicia de paz de la Capital, incorporando a los obreros de la industria a los beneficios que la ley acuerda a los empleados del comercio y de la misma industria, es la causa perturbadora a que me he referido. Este proyecto aclaratorio del alcance de la ley número 11.729, tiende a concluir con un estado de cosas inquietante para el desarrollo normal de las industrias locales y a todas luces injusto. Por él se establece, clara e intergiversablemente, que los obreros de la industria no están comprendidos en los beneficios de la ley número 11.729.

El régimen del equilibrio de los poderes del Estado, organizado por la Constitución nacional, exige una gran prudencia por parte de los demás poderes, en la interpretación de las medidas que cada uno dicte dentro de su órbita propia. Ninguno de los poderes de la Constitución, debe invadir la jurisdicción de los otros, porque su juego regular, es el que conserva el orden y con él, la normalidad de la vida civil y social. En este caso la jurisdicción del Poder Legislativo ha sido invadida por la rama de paz del Poder Judicial.

La ley número 11.729, no comprende en sus beneficios, a los obreros de la industria. Esta es la voluntad del legislador. Ninguna interpretación cabía a la nitidez de su texto, aclarado además en este sentido, en el curso del debate a que diera origen su sanción. En estos momentos, por virtud de una interpretación extensiva, que importa una verdadera invasión de la rama de paz del Poder Judicial sobre la ley dictada por el Poder Legislativo, las industrias de la Capital Federal, soportan una competencia injusta, de las industrias establecidas en los alrededores, de jurisdicción provincial, porque a éstas, reiterados fallos de la justicia federal, las eximen de la obligación de pagar el despido de sus obreros.

Las comunicaciones cada vez más rápidas entre las diversas localidades del país, en las que casi invariablemente la justicia federal ha sostenido el mismo criterio, hará cada día más grave esa competencia.

Creo que todos los obreros de la República deben ser amparados por una legislación inspirada en los principios de la solidaridad social y mantengo siempre ese punto de vista. La ley número 11.289, comprendía en su generoso articulado, tanto a los empleadores como a los empleados, a los patrones y a los obreros.

Cuando llegó al Senado el proyecto del Ejecutivo actual, estableciendo la implantación del precio má-

ximo para los artículos de primera necesidad destinados al comercio interno, creí que se abría una época definitiva para la orientación legislativa hacia la solidaridad social. Pero el retiro del proyecto de regulación de la industria azucarera, la tibieza con que ha sido defendido en la Cámara de Diputados y la saña con que ha sido atacado, tal vez porque amparaba a una industria netamente argentina, me hacen ver que los hombres responsables de una política confesada desde 1930 hasta la fecha, dudan de la posibilidad de establecer dentro del régimen liberal de la Constitución, una legislación inspirada en los principios de la solidaridad social, única forma de evitar para la industria los efectos de la competencia ilimitada y para el trabajador, la explotación inconsiderada, que engendra el choque desordenado de los intereses económicos. Por eso pienso que los partidos de la Concordancia, al consentir el aplazamiento de una ley como la del régimen de regulación de la industria azucarera, han comprometido uno de los propósitos más trascendentales de su programa de acción política, económica y social, ampliamente confesado.

Con este proyecto, deseo retomar la orientación hacia la solidaridad social, hacia la armonía entre el capital y el trabajo, que animaron a los gobiernos que constituyó la Concordancia, cuyas más claras y completas exteriorizaciones, son, para tomar ejemplos recientes: el laudo arbitral dictado por el presidente Justo con motivo de los descuentos al personal ferroviario; el proyecto del establecimiento de salario mínimo para todos los trabajadores del país, que creo aún no ha considerado la otra rama del Poder Legislativo, quizás esta misma ley cuyo alcance va a precisar este proyecto, con la cual se quiso remediar el desamparo en que quedaron los empleados de comercio, en virtud de la suspensión de la ley número 11.289, y finalmente la ley iniciada por el Ejecutivo actual fijando los precios máximos para los artículos de primera necesidad, destinados al consumo interno.

Para cuando la Comisión de Legislación del Senado despache este proyecto, como lo espero, será la oportunidad de exponer, con mayor amplitud, las razones que me han determinado a presentarlo.

*Ricardo Caballero.*

—A la Comisión de Legislación General.

### 3

#### MOCION

**Sr. Palacios.** — Pido la palabra.

Entiendo que el primer asunto que debe ponerse a consideración del Senado es el despacho de la Comisión de Legislación General, relativo a estabilidad y escalafón de los empleados bancarios.

Ayer el señor senador Rothe pidió la palabra para informar este proyecto. El Diario de Sesiones, dice: «Señor presidente. — Queda convertido en ley el proyecto relativo a préstamos a los empleados ferroviarios». Y, a continuación: «Al enunciarse el despacho de la Comisión de Legislación General en el pro-

yecto de ley venido en revisión, sobre estabilidad y escalafón de los empleados bancarios»... se hizo moción de pasar a un breve cuarto intermedio. Pasamos a antecelas y como algunos señores senadores estaban muy fatigados de la labor realizada, no volvieron al recinto.

De manera, que estamos ahora en la misma sesión de ayer, y tiene la palabra el señor senador Rothe, miembro informante de la mayoría de la Comisión de Legislación General.

**Sr. Serrey.** — Pido la palabra.

Los antecedentes y hechos que invoca el señor senador, son exactos, pero, por otra parte, hoy estamos en una sesión especial, pedida por el señor senador por San Luis...

**Sr. Palacios.** — Más fuerte; que no se oye.

**Sr. Serrey.** — ... relativo a la jubilación de marítimos. Es un despacho de la Comisión de Legislación, de la cual forma parte el señor senador por la Capital, y que tiene la ventaja de que no dará lugar a larga discusión. Por eso le ruego al señor senador que acepte la preferencia para tratar la jubilación de los marítimos, cuyo dictamen él ha contribuido a despachar.

**Sr. Palacios.** — Efectivamente, el proyecto a que se refiere el señor senador por Salta es un despacho de la Comisión de Legislación General, de la que tengo el honor de formar parte. Considero que no ocupará mucho tiempo la atención del Senado, y por eso acepto la indicación, bien entendido que inmediatamente después de votado ese asunto, pasaremos a considerar el proyecto sobre escalafón de empleados bancarios, a cuyo efecto ruego a los señores senadores que no dejen a la Cámara sin número.

**Sr. Presidente.** — Habiendo aceptado el señor senador por la Capital la preferencia indicada por el señor senador por Salta, se va a dar lectura del despacho.

**Sr. Eguiguren.** — Si me permite, señor presidente, antes de leerse el proyecto deseo formular una moción para que después de aprobada la ley sobre escalafón de bancarios, se considere el despacho de la comisión, sobre régimen autónomo del transporte automotor. Y para el caso de que en la sesión de hoy no hubiere tiempo de considerarlo, hago extensiva esta indicación para que este asunto se trate en la sesión de mañana, después del presupuesto.

**Sr. Presidente.** — Está en discusión la moción formulada por el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Arancibia Rodríguez.** — Pido la palabra.

Me permito recordar al señor senador que la sesión de hoy obedece a una citación especial para tratar el despacho de la Comisión de Legislación General, sobre jubilación de marítimos, y aquellos asuntos que tuviesen señalada de antemano preferencia. Desde luego, está perfectamente interpretado el alcance de la indicación que formulé en la sesión de ayer, para que se trate a continuación de la jubilación de los marítimos el proyecto sobre escalafón de bancarios, como acaba de resolverse, pero no me parece que encuadre dentro de esta sesión votar más preferencias.

Por esta razón yo me opongo a la moción del señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Eguiguren.** — Yo no creo que exista incompatibilidad entre la resolución adoptada por la Cámara y la moción que formuló. Entiendo que después de la ley de jubilación de marítimos y la de escalafón de bancarios, no hay hoy otro asunto que considerar, y el Senado puede resolver tratar cualquier otro. Y, como he dicho, para el caso que se interrumpiere esta sesión por cualquier motivo, la indicación la hago extensiva para tratar este proyecto en la sesión de mañana, después del presupuesto.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar la moción del señor senador por Entre Ríos.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Al orden del día.

#### 4

#### CREACION DE LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL. — CONSIDERACION.

—Se lee:

*Honorable Senado:*

Vuestra Comisión de Legislación General ha estudiado el proyecto de ley que ha enviado, en revisión, la Honorable Cámara de Diputados, por el que se crea la caja de jubilaciones, pensiones y retiros de la Marina Mercante Nacional, y, por las razones que expone el senador informante, os aconseja su sanción con las siguientes modificaciones:

Substituir los incisos b) e i) del artículo 2º, por los siguientes:

«b) El personal administrativo al servicio permanente de toda empresa o agencia

de navegación nacional o extranjeras establecida en el país;

«i) El personal permanente ocupado en la carga y descarga de los buques».

Sala de la comisión, septiembre 22 de 1939.

*Carlos Serrey. — Laureano Landaburu. — Alfredo L. Palacios.*

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Créase la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Marina Mercante Nacional, con sujeción a las disposiciones que establece la presente ley.

Art. 2º — Quedan comprendidos en los beneficios de esta ley:

a) Todo el personal embarcado sin distinción de ocupación o cargo, en buques de la Marina Mercante Nacional, sean éstos de comercio, de pesca o de turismo.

Quedan también comprendidos los propietarios de barcos de comercio o de pesca cuando reúnan las condiciones de tripulantes de sus propios barcos;

b) El personal administrativo al servicio permanente de toda empresa de navegación nacional o extranjera establecida en el país;

c) El personal administrativo al servicio permanente de toda empresa de navegación argentina que por razones de servicio fuera trasladado temporalmente al extranjero;

d) Los empleados de administración y los obreros de los astilleros, varaderos y talleres navales, cualquiera fuera la jurisdicción en que funcionen;

e) Los empleados de administración y los obreros de empresas portuarias, entendiéndose por tales las que se dediquen a la explotación y administración de puertos por concesión nacional o provincial;

f) El personal administrativo de instituciones con personería jurídica que agrupen en su seno a empresas de navegación y agencias marítimas nacionales o extranjeras;

g) Los prácticos y baqueanos en general que no estén incluidos en leyes análogas;

- h) Los empleados de las instituciones encargadas de reclutar, contratar o distribuir el personal de los buques;
- i) El personal ocupado en la carga y descarga de los buques;
- j) Los empleados de las asociaciones del personal marítimo o fluvial y los de las entidades patronales.

Art. 3º — La navegación de los inscriptos, para que dé derecho a la jubilación, pensión o retiro, debe efectuarse a título profesional y comprende no sólo a los que desempeñan tareas en la marcha, dirección y cuidado del buque, sino también al personal de servicio.

Art. 4º — Se consideran servicios de navegación los cumplidos por los inscriptos marítimos en navíos de bandera nacional, sean de comercio, de pesca, o de turismo, que hagan la navegación transatlántica, de las costas marítimas, de los ríos interiores y canales navegables de la República.

La navegación en los buques de turismo sólo da derecho a los beneficios de esta ley, al personal asalariado afectado a la dirección y cuidado del buque. Se consideran como de navegación, los servicios en los puertos, faros, pontones, administraciones, agencias, varaderos, talleres u oficinas de que habla el artículo 2º.

Art. 5º — Los servicios de navegación serán comprobados por la matrícula que llevarán las oficinas de inscripción de acuerdo a la declaración de los roles de equipaje que deberán hacer los armadores; y a la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo, en cuanto concierne a los no embarcados.

La infracción por los armadores de esta obligación, será penada con una multa de \$ 500 m/n., que se duplicará en caso de reincidencia.

Los servicios se contarán desde el día del embarque hasta la cesación efectiva de ellos, computándose también como navegación activa el tiempo que se preste servicios en buques en reparación, talleres, oficinas o en funciones afines a la navegación. No será considerado servicio de navegación un lapso mayor de seis meses en que el personal hubiere permanecido sin embarque o destino.

El práctico que por cualquier causa, haya dejado durante más de seis meses de ejercer su profesión, no tendrá derecho a que se le compute dicho tiempo a los efectos de los beneficios de esta ley. Los servicios a que se refiere este artículo, no computados por la autoridad marítima por los armadores o por las compañías de navegación, ya sea por la no existencia de libretas

de navegación, o por deficiencias en los archivos, serán comprobados en la forma que determine la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Art. 6º — La antigüedad del personal comprendido en esta ley será reconocida desde la fecha de su ingreso al servicio de cualquiera de los empleadores a que se refiere la misma, siempre que los interesados cumplan los requisitos exigidos.

Art. 7º — La fracción que exceda de seis meses, será computada por un año entero.

Art. 8º — Los beneficiarios de esta ley que fueren trasladados al exterior por razones de servicio, tendrán derecho a la devolución de sus aportes.

Si volvieren a la República podrán reintegrarse al goce de todos los derechos que acuerda esta ley, restituyendo las sumas retiradas con más el interés del 5 % y cumpliendo las otras obligaciones que ella impone.

Art. 9º — Los beneficios mínimos que la caja acordará, según las condiciones que establezca la ley orgánica, son los que siguen:

- a) Jubilación ordinaria;
- b) Jubilación extraordinaria al inscripto que se incapacite para el trabajo;
- c) Jubilación extraordinaria para el inscripto que se incapacite para el trabajo por actos de servicio;
- d) Pensión por fallecimiento del inscripto a la familia del mismo.

Art. 10. — El capital de la caja se formará con los recursos siguientes:

- a) Con el descuento mensual obligatorio del 6 % sobre los sueldos de los empleados y obreros, comprendidos en esta ley, siempre que no excedan de \$ 1.000 m/n. Excediendo esa suma, el descuento se hará únicamente sobre dicha cantidad. Cuando las retribuciones del personal son variables, se computará el promedio de la retribución durante los últimos cinco años;
- b) Con el importe de un mes de sueldo de los empleados y obreros que tengan menos de quince años de servicio, que será abonado en cuotas mensuales del 4 por ciento;
- c) Con el importe de dos meses de sueldo de los empleados y obreros que tengan más de quince años de servicio, que serán abonados en cuotas mensuales del 2 por ciento;

- d) Con la diferencia del primer mes de sueldo cuando el empleado u obrero pase a ocupar un empleo mejor rentado o perciba aumento de sueldo;
- e) Con la suma mensual que aporten los empleadores, y que consistirá en una contribución única equivalente al 4 % sobre los sueldos y jornales de todos sus empleados y obreros, siempre que no excedan de \$ 1.000 m/n. mensuales. Por los sueldos que excedan esa cifra la contribución se pagará solamente hasta dicha cantidad;
- f) Con el producido de los remates y ventas anuales de mercaderías extraviadas, halladas en las playas o sobrantes de a bordo, como asimismo por servicios pagados de más por el público y no reclamados en el término de un año, quedando prescriptos los derechos de los dueños al cabo de ese plazo;
- g) Con una contribución del 2 % del valor del importe de los fletes de cargas entre puertos argentinos, incluidos la arena y el pedregullo. El Poder Ejecutivo reglamentará la percepción de estas contribuciones que estarán afectadas al sostenimiento de la Caja como aporte del Estado;
- h) Con el producido de las multas que se impongan a los buques nacionales y extranjeros, a las empresas de navegación, cualquiera que fuese su nacionalidad, a los armadores y, en general, a todas aquellas que se originen por incumplimiento de las ordenanzas aduaneras, marítimas y fluviales;
- i) Con las multas impuestas con arreglo a esta ley;
- j) Con las donaciones y legados hechos a Caja.

Los descuentos y contribuciones a que se refiere este artículo, se harán efectivos por parte de las entidades patronales y por los empleados y obreros desde la promulgación de esta ley.

Art. 11. — Las empresas afectadas por esta ley, están obligados a efectuar los descuentos a su personal y depositarlos en el Banco de la Nación Argentina, dentro de los diez primeros días siguientes a cada mes vencido, a la orden de la caja, sin descuento alguno por ningún concepto.

Art. 12. — Los empleadores podrán afiliarse al régimen de esta ley y gozarán de los beneficios que la misma otorga; pero deberán en-

tregar a la caja una cotización igual a la suma del aporte obrero y patronal.

Art. 13. — Las empresas de navegación que no depositaren en el tiempo y forma prescriptos en el artículo 10 de esta ley, la suma a que están obligadas, incurrirán en una multa de doscientos pesos por cada día de demora hasta efectuar el depósito, previa intimación del presidente del directorio de la caja.

Art. 14. — Los fondos y rentas que se obtengan por esta ley, serán de exclusiva propiedad de los comprendidos en ella, con cuyo producido se atenderán las jubilaciones, pensiones y retiros, no pudiendo distraerse para otros fines que los indicados en la misma.

Art. 15. — Los fondos de la caja se invertirán en títulos de renta nacional.

El directorio estudiará y propondrá al Poder Ejecutivo la mejor forma de usar una parte de dichos fondos en créditos hipotecarios sobre casas para los empleados y obreros comprendidos en esta ley.

Art. 16. — La administración de la caja instituida por esta ley estará a cargo de un directorio formado por un presidente designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, tres representantes titulares de los empleadores y tres del personal e igual número de suplentes de unos y de otros.

Para la elección de sus representantes, cada uno de los empleadores dispondrá de un número de votos proporcional al total de sueldos y salarios abonados en el año inmediato anterior.

Los representantes del personal serán designados por votación secreta y directa en una asamblea de delegados que se reunirá en la Capital Federal. Los delegados serán elegidos a simple pluralidad en comicios distribuidos en los distritos electorales en la forma que determine la reglamentación respectiva.

El número de delegados a elegir en cada distrito será proporcional al de afiliados a la caja en el mismo y cada delegado tendrá en la asamblea un número de votos igual al de sus representantes.

Queda prohibida toda intervención de los empleadores o agentes de los mismos en los trámites electorales.

El Poder Ejecutivo nacional reglamentará los trámites electorales y del escrutinio, de acuerdo con estas bases y presidirá la primera elección, por intermedio del Departamento Nacional del Trabajo y la Inspección General de Justicia, estando la dirección de las siguientes

tes a cargo de la caja con intervención de la Inspección de Justicia.

Art. 17. — Los representantes llamados a formar parte del directorio de la caja, deberán pertenecer a distintas instituciones marítimas al igual que los empleados.

Art. 18. — El presidente de la Caja, durará tres años en sus funciones. El mandato de los representantes será por igual término.

Art. 19. — El directorio gozará de la remuneración que fijará el presupuesto de la caja. El presidente es el representante legal de aquella, con voz y voto en las deliberaciones del mismo. Los empleados de la Caja estarán bajo sus inmediatas órdenes, pero su nombramiento y remoción corresponderá al directorio.

Art. 20. — El directorio de la Caja dictará su reglamentación interna y fijará anualmente el presupuesto de gastos, con aprobación del Poder Ejecutivo Nacional.

Practicará un balance general anual, que será publicado, y un balance trimestral de comprobación de números y saldos, que será distribuido a las empresas, para que sea colocado en lugar visible para el personal.

Todos los gastos de esta caja serán fiscalizados por la Contaduría General de la Nación.

Art. 21. — El primer directorio designará una comisión técnica la que en el plazo máximo de un año levantará el censo de afiliados y dentro del año de efectuado el censo, hará una valuación actuarial del plan de prestaciones que puedan acordarse a los afiliados sobre la base de los recursos que esta ley crea.

El directorio, de acuerdo con estas bases, propondrá al Honorable Congreso a los dieciocho meses de la promulgación de esta ley, el monto de los beneficios que a su juicio deba conceder la ley orgánica, así como los recursos especiales, a que sea necesario acudir para cubrir el déficit motivado por el reconocimiento de antigüedad del personal.

Art. 22. — Los gastos de administración de la Caja y de traslación de electores serán costeados con los fondos creados por esta ley, no pudiendo exceder el total del 3 % de los percibidos por el artículo 10.

Art. 23. — El directorio tendrá personería para promover ante los tribunales de justicia, las acciones derivadas de esta ley.

Art. 24. — No podrá ser delegado ni director, ni representante suplente del personal, el empleado que no esté en servicio activo en cualquiera de los organismos llamados a la elección; pero en el caso de cesar en su empleo mientras se hallare desempeñando funciones de director

de la caja, a que se refiere esta ley, continuará en el cargo de tal, siempre que las causas de la cesantía no afecten la honorabilidad y buen nombre del empleado.

Art. 25. — Los afiliados comprendidos en esta ley que hubieran dejado de prestar servicios a partir del 1º de octubre de 1938, hasta que se dicte la ley orgánica, por causas que no fueran de mala conducta comprobada, pueden acogerse a los beneficios de la misma. Igual beneficio se reconoce a los herederos con derecho a percibir pensión.

Art. 26. — Las empresas de navegación estarán obligadas a suministrar al Directorio de la Caja, todas las informaciones que solicite sobre el personal y a permitir las comprobaciones que juzgue pertinentes, bajo el apercibimiento y una multa de \$ 500 a \$ 2.000 moneda nacional.

Art. 27. — Queda reconocido el personal de la Caja en los beneficios que acuerda la presente ley.

Art. 28. — Derógase toda disposición de otras leyes que se opongan a la presente.

Art. 29. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

JUAN G. KAISER.

*Carlos González Bonorino.*

**Sr. Presidente.** — En consideración en general.

**Sr. Serrey.** — Pido la palabra.

Me complace hacer esta breve exposición en un ambiente primaveral, alegrado por tanto elemento joven, que anima con su presencia esta vieja sala.

Es una antigua preocupación de todos los hombres de buena voluntad, que se preocupan del bienestar de sus semejantes y procuran que se lleve al espíritu de la legislación principios de justicia superior, llegar al seguro total en virtud del cual serían amparados todos aquellos a los cuales la edad, las enfermedades, o causas análogas, disminuyen su vitalidad y les impiden dedicarse al trabajo al que deben la subsistencia propia y la de aquellos que de ellos dependen.

Una iniciativa generosa, fracasada por imprevisión —pues se llegó a conclusiones que se creían acertadas— fué la que se tradujo en la ley número 11.289. La improvisación que se hizo, sin precederla de los estudios y cálculos suficientes, condenó a esta ley, de tendencia tan humanitaria, al fracaso y motivó la suspensión de la misma, suspensión que, en realidad, fué una derogación definitiva.

Motivos análogos impulsaron al ex senador Bravo a proponer la ley de pensiones a la vejez, proyecto reproducido después por él y el senador Palacios, y que el señor senador por Mendoza, Suárez Lago, anunció presentará nuevamente en las sesiones del próximo período legislativo.

Ojalá que esa nueva iniciativa se la cimente en los antecedentes y estudios suficientes y se encuentre la manera de financiarla, en las circunstancias adversas por que pasa el país, agravadas por hechos de pública notoriedad, cuyo alcance es imposible prever por ahora.

La ley a que me refiero aspiraba a la solución completa del problema. Ahora, en la imposibilidad de llegar a resolverlo de una sola vez, es necesario preocuparse de aquellos casos en que sea posible llegar a la financiación de la ley respectiva. En aquella estaban comprendidas, en sus disposiciones, los periodistas, que ya tienen su caja, y los hombres de mar, a quienes se ocupa el Senado en esta sesión.

La vida de los marinos es ruda y contribuye a desgastar las fuerzas físicas y las energías vitales. Entregados al azar de los elementos y llevando una existencia poco propicia a la defensa de la salud, con frecuentes ausencias del calor del hogar, llegan a los veinte o treinta años de servicios y se encuentran imposibilitados de continuar en sus tareas habituales e inhabilitados para reemplazarlos por otras que sean igualmente remunerativas.

Según la feliz expresión usada por uno de los diputados que presentaron proyectos al respecto son como «náufragos arrojados a una orilla inquietante en que no tienen amparo ni ayuda».

Razones de todo orden, pues, aconsejan preocuparse de la suerte de ellos para cuando se encuentren exhaustos y sin fuerzas para ejercer el oficio que constituyó su medio de vida.

Diversos proyectos se han presentado al respecto, todos ellos en la Cámara de Diputados.

Pertenece el primero al señor Rogelio Araya; tiene más de veinte años, pues fué presentado el año 1918. Hubo muchos después, hasta llegar a los de los señores Spinetto, Coca, de Andreis y Cafferata que han servido de base al despacho de la Cámara de Diputados.

Es justo hacer constar que estas iniciativas respaldadas en motivos de bien público, provienen de hombres que figuran en los diversos partidos en que se divide la opinión: ¡Ojalá asuntos de esta naturaleza, ajenos en absoluto a las preocupaciones de la política electoral,

sean un campo en que concuerde la labor de todos, la labor generosa y solidaria entre los que forman parte de los diversos sectores, que así contribuirán de consuno al progreso de la legislación y al establecimiento de la paz social!

Razones de prudencia elemental, derivadas de la altura del período de sesiones, me obligan a ser muy breve, y por eso, dejando fundados los motivos de esta ley con las palabras que he pronunciado, voy a ocuparme, sintéticamente, de su contenido.

Aleccionados por la experiencia dolorosa del pasado y teniendo en cuenta que instituciones análogas han llevado una vida precaria, se ha llegado a la conclusión de que no es posible, desde luego, establecer los beneficios a acordarse, so pena de crear una institución de vida difícil y problemática y construir un edificio que haya que apuntalar continuamente.

Por eso esta ley, a la manera de la de jubilación de periodistas, es simplemente una ley básica: se limita a establecer cuáles serán las autoridades de la caja y cuáles los aportes que han de constituir el fondo de ella. Aquellas autoridades deberán, en un plazo relativamente breve, realizar los censos y cálculos actuariales que determinen cuáles son los beneficios que se puede acordar, compatibles con la subsistencia y con la vitalidad de la caja.

El fondo, aparte, diré así, de ciertos recursos de detalle, como multas, venta de mercaderías extraviadas y donaciones, difíciles todos ellos de calcular con exactitud siquiera aproximada, se forma con aportes de tres orígenes: de los empleados, de los empleadores y del Estado.

Lógico es que los trabajadores a que se refiere esta ley, contribuyan a formar el fondo de ella, puesto que es una institución de previsión que trata de asegurar su propio porvenir. Dada la poca propensión al ahorro que tienen aquellos cuyas entradas son apenas suficientes para las necesidades ordinarias de la vida, es necesario establecer esto con carácter obligatorio y así lo establece la ley. Esta obligatoriedad es una base esencial para la subsistencia de esta caja. De otra manera tendríamos que luchar contra el fácil abandono que hacen de sus esperanzas en el porvenir, muchos para atender las necesidades del presente o aun para llevar una vida algo más cómoda. Además, no estableciéndose la obligatoriedad no se sabría con quiénes se cuenta para formar el fondo común y sería imposible así llegar a cálculo positivo alguno.

Igualmente lógica es la contribución de los empleadores. Todo aquel que tiene una empresa que necesita valerse de un núcleo de emplea-



dos o de obreros, tiene necesariamente que estar ligado al bienestar de los mismos, y debe contribuir a toda ley de previsión. Se trata de una consecuencia del contrato de trabajo, que si no está prevista en los códigos, es una de las leyes no escritas que debe traducirse en los principios de la legislación positiva.

Finalmente, la contribución del Estado se impone por razones análogas, aparte de que el trabajo de los hombres de mar es en beneficio común, contribuye a la prosperidad general y hay interés en todos en que no quede un grupo numeroso de hombres obligados a vivir en los asilos o a llevar una vida de parásitos, tanto más injusto cuanto que han contribuido con sus esfuerzos a la obra común durante mucho tiempo.

En todas las legislaciones del mundo civilizado se dedican fuertes sumas a estas obras de previsión social y es el sistema adoptado por nuestra legislación en todas las leyes de la materia que existen en el país.

Dado, entre tanto, que por el estado precario de las finanzas nacionales no se puede apelar a rentas generales, cuyo producido es posible no alcance ni para las necesidades comunes de la administración, ni pensar en aumentar el déficit o aumentar la deuda pública, entonces hay que adoptar un sistema que consista en una contribución moderada, establecida sobre cosas relativas al servicio de mar, y que se cree dará una cantidad suficiente para representar el haber del Estado.

En esta ley está comprendida la totalidad del personal ligado con las actividades marítimas. No solamente el embarcado, que en realidad constituye específicamente lo que se llama hombres de mar, sino a todos los que prestan como empleados administrativos o como obreros, sus servicios en las empresas y agencias de navegación, en los astilleros, talleres navales, los prácticos, los baqueanos, los empleados en las instituciones ocupadas en el reclutamiento del personal marítimo y por fin los estibadores con la limitación de que daré cuenta al referirme a las reformas que aconseja la comisión.

El gobierno de esta caja se confía a un directorio compuesto por igual número de representantes, de los empleados y de los empleadores, presidido por un funcionario designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Es el sistema que corresponde por razones de equidad natural ya que los fondos que forman el haber de esta caja, pertenecen en realidad a

los que lo subscriben y así se consigna en el texto mismo de la ley.

Una innovación es la que consiste en admitir a los empleadores a adherirse a los beneficios de la caja. Características especiales en esta clase de trabajos imponen llegar a esta conclusión: la mayor parte de los empresarios de transporte, fluvial sobre todo, distan mucho de ser capitalistas, pues son en su mayoría empleados que, con su propio trabajo, han logrado comprar embarcaciones más o menos pequeñas. Su situación es poco más brillante que la de los mismos empleados y necesitan realmente estar comprendidos en algo que les asegure su futuro. Además, respecto de ellos se trata de un ingreso voluntario ya que es facultativo aceptar o no su inclusión. La ley comprende a todo el personal actual, ya sea el que ingresó recién o el que presta servicios desde hace un período más o menos largo. A los empleados actuales se les obliga a hacer un aporte suplementario que alcanza a uno o dos meses de sueldo según que su tiempo de servicios sea menor o mayor de 15 años. La consecuencia de esto es que se jubilará bien pronto el personal antiguo y que ello será con un aporte menor que los que recién comienzan, pero esta aparente inequidad tiene un fundamento de justicia indiscutible. No es posible abandonar a los que ya han prestado servicios durante mucho tiempo. Este es el sistema establecido por otra parte, en todas las cajas de jubilaciones del país. Resolver lo contrario importaría en realidad olvidarse del principio de solidaridad entre los hombres que es el que da contenido ético a esta clase de instituciones.

Las reformas que aconseja la comisión son, en realidad, solamente dos, ambas en el artículo 2º.

La primera es en el inciso b), y consiste en incluir en los beneficios de la ley a los empleados de las agencias y no solamente, como dice el despacho de la Cámara de Diputados, de las empresas navieras. Esta reforma ha sido sugerida por el señor senador por Santa Fe, doctor Caballero, y se funda en que se trata de situaciones análogas. Son hombres empleados generalmente en los puertos del interior en trabajos de cabotaje y, naturalmente, por tratarse de negocios de menor cuantía, no existen empresas especiales para ellos; son anexos de las empresas navieras.

La segunda reforma es la que se introduce en el inciso i), y consiste en agregar la palabra «permanente» con relación al trabajo de los hombres encargados de la carga y descarga de los

buques. La inclusión de los estibadores fué objeto de observaciones, fundadas por cierto, que hicieron las entidades empleadoras y la Bolsa de Comercio. Hacían notar que la mayor parte de estos hombres de mar hacían un trabajo simplemente accidental. Según estadísticas del Departamento Nacional del Trabajo, de las que se ha tomado como tipo la del mes de diciembre del año 1936, hay hombres encargados de la carga y descarga de los buques, que no trabajan más de un día por mes y el término medio es de 10 jornadas mensuales. Son hombres que llevan una vida nómada, que unas veces descargan buques, otras, vagones ferroviarios, y otras, se ocupan de labores rurales. El mismo Consejo Pro Federación Argentina de Portuarios y Estibadores, reconoce esta situación al decir: «Debe señalarse que entre éstos, hay dos subtipos de obreros: 1º, el prontuario profesional, de no menos de 15, 20 y 30 años de servicios continuos, que abarca el llamado personal de las bordadas permanentes, y que son considerados en la práctica como personal efectivo de las compañías estibadoras; 2º, personal changador: en su mayoría no profesional, por su carácter de pasajero en el trabajo y que exclusivamente se forma del tripulante desocupado o de turno de la marina mercante y de los desocupados del campo y de otras industrias. El puerto, en este sentido, es el lugar de refugio forzoso, en las actuales condiciones, de la mano de obra desplazada de otras actividades del país.»

Esta circunstancia, reconocida, como digo, por los mismos interesados, obligaba a una discriminación. No se podía comprender en la ley al personal ocupado accidentalmente. Era hasta imposible aplicarle las prescripciones legales, porque no tienen una recompensa de su trabajo que pueda considerarse más o menos como una entrada mensual fija, y entonces, no había manera de aplicar las disposiciones que mandan pagar un porcentaje sobre la mensualidad, un mes o dos de sueldo, según las circunstancias, o también la diferencia entre el actual y el futuro en caso de ascenso.

En la legislación mundial al respecto, se hace también esta distinción.

Y así, no se hace efectiva la jubilación sino de los empleados permanentes en las leyes que puedo citar de Alemania, Francia, Inglaterra, Irlanda, Luxemburgo, Holanda y Checoslovaquia.

Es indudable, que no puede excluirse a los estibadores de carácter permanente, que están prestando servicios, como se acaba de ver en esta exposición, que llegan hasta 15, 20 y 30

años. Pero la comisión, al haber reducido a ellos los beneficios de la ley de que nos ocupamos, quiere hacer notar que no se puede prescindir de la suerte de los demás y que es necesario abordar el problema general en toda su amplitud. La comisión cree que debe ser una de las preocupaciones del próximo período de sesiones del Congreso: dictar una ley que regularice el trabajo marítimo y que impida esta extensa legión de trabajadores de carácter simplemente accidental que nos lleva hoy a la conclusión de excluir de una ley de beneficio social a un núcleo de trabajadores muy digno de ser tenido en cuenta. Ojalá se haga en fecha próxima y creo que estará mejor habilitado que nadie para ocuparse de ello el directorio de esta institución a crearse, ya que por su composición, es el que conoce mejor esta clase de asuntos.

Con lo expuesto, dejo brevísimamente informado el pensamiento de la comisión y me ofrezco a dar a los señores senadores, los datos que consideren necesarios con respecto a sus disposiciones particulares.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar en general el despacho de la comisión.

—Se vota, y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — En consideración en particular.

**Sr. Serrey.** — Hago indicación para que artículo que no se observe, se dé por aprobado.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente.** — Habiendo asentimiento, así se hará.

—Se aprueban, sin observación, los artículos 1º al 20, inclusive.

—Se lee el artículo 21.

**Sr. Serrey.** — Pido la palabra.

Este artículo contiene una contradicción que es conveniente salvar: concede dos años de plazo para hacer el censo y el cálculo actuarial, y en cambio, le exige al directorio, que dentro de los 18 meses de la promulgación de esta ley, presente el programa de los beneficios, que se ha de basar precisamente en esos dos elementos de juicio.

Propongo que el segundo apartado de este artículo diga: «El directorio, de acuerdo con estas bases, propondrá al Honorable Congreso a los 18 meses de realizada la valuación actuarial...», continuando tal cual está en el despacho.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo con la modificación propuesta por el señor miembro informante de la comisión.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 2.

—Sin discusión, se vota y aprueba, así como el resto del proyecto.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado.

## 5

### ESTABILIDAD Y ESCALAFON DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS. — CONSIDERACION.

—Se lee:

Despacho de la mayoría

*Honorable Senado:*

Vuestra Comisión de Legislación General ha estudiado el proyecto de ley que ha enviado, en revisión, la Honorable Cámara de Diputados, sobre estabilidad y escalafón del personal de las instituciones bancarias, y, por las razones que expondrá el senador informante, os aconseja, en mayoría, que prestéis vuestra sanción al siguiente

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Los empleados de bancos particulares del país, sean de crédito real o personal, tienen derecho a la estabilidad, sueldo mínimo y escalafón de sueldos, de conformidad a las prescripciones de esta ley.

Art. 2º — Son bases esenciales del estatuto de servicio bancario:

- a) La estabilidad de los empleados, cualquiera sea su denominación y jerarquía, salvo las causas graves imputables al mismo y previstas en esta ley;

- b) El sueldo o salario mínimo para todo el personal de oficina y de servicio;
- c) El escalafón de sueldos hasta \$ 500 m/n. mensuales, a base de la idoneidad y antigüedad del empleado;
- d) La bonificación del sueldo o salario del empleado, a razón de \$ 5 m/n. mensuales por cada hijo menor de 16 años que tenga a su cargo;
- e) Los horarios y regímenes de licencias que concilien la eficacia del servicio con la salud de los empleados;
- f) La fijación de las normas del servicio bancario, que prevengan y resuelvan las cuestiones entre las empresas y sus empleados;
- g) La edad mínima de 18 años y buena salud como condiciones de ingresos futuros.

Art. 3º — Las únicas causas de cesantías de los empleados bancarios son las siguientes:

- a) Condenación judicial por delitos contra el banco o contra terceros, o auto firme de prisión preventiva contra el empleado. Si hubiere absolución o sobreseimiento definitivo, será repuesto en su cargo;
- b) Inhabilidad física o mental;
- c) Enfermedad contagiosa que constituya un peligro para el personal;
- d) Inasistencias prolongadas o reiteradas del servicio;
- e) Desobediencias graves y reiteradas a las órdenes e instrucciones que reciban en el ejercicio de las funciones bancarias respectivas;
- f) Embargos reiterados en los sueldos.

Art. 4º — Los sueldos del personal bancario hasta \$ 500 m/n. mensuales estarán sujetos a aumentos periódicos fundados en la antigüedad y competencia del empleado, de modo que los promedios de sueldos para las distintas categorías de antigüedad no sean inferiores a los establecidos en la escala «A» del siguiente escalafón:

CATEGORIAS	EMPLEADOS		PERSONAL DE SERVICIO	
	ESCALA «A»	ESCALA «B»	ESCALA «A»	ESCALA «B»
	Promedio de sueldos \$ m/n.	Sueldo mínimo \$ m/n.	Promedio de sueldos \$ m/n.	Sueldo mínimo \$ m/n.
Sueldo inicial . . . . .	—	140	—	120
Antigüedad 2 años . . . . .	170	160	140	130
„ 5 „ . . . . .	225	175	150	140
„ 10 „ . . . . .	250	200	165	150
„ 15 „ . . . . .	325	225	180	160
„ 20 „ . . . . .	375	250	200	170